EL RESPETO Y LA DEFENSA DEL DERECHO DE AUTOR EN LA NUEVA LEGISLACIÓN MEXICANA ¹

Horacio Rangel Ortiz

Sumario: I. Introducción; II. Sistema administrativo y sistema penal; III. Conciliación y arbitraje; IV. Palabras finales.

I. INTRODUCCIÓN

El 24 de marzo de 1997 entró en vigor la cuarta *Ley federal del derecho de autor* que ha regido en México, en esta ocasión firmada por el presidente Zedillo el 18 de diciembre de 1996 y publicada en el *Diario Oficial de la Federación*, el 24 de diciembre de 1996, para entrar en vigor a los noventa días después de su publicación. La nueva ley abroga a su predecesora, la Ley federal de derechos de autor de 1956 reformada en 1963.

Como lo hizo notar mi distinguido colega el abogado Adolfo Loredó Gil en una reciente reunión que tuvo lugar en el Fondo de Cultura Económica, a diferencia de sus predecesoras que se referían a los derechos de autor en plural en el título de la ley, la de 1996 se refiere al derecho de autor así, en singular. Será tema socorrido en las reuniones sociales de abogados la preferencia de cada quien.

¹ Texto base de la conferencia pronunciada por el autor el día 3 de abril de 1997 en el seminario «El TLC y la propiedad intelectual: tópicos actuales y expectativas», organizado conjuntamente por el *National Law Center for Inter-American Free Trade*, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial en Jiutepec, Morelos, los días 3 y 4 de abril de 1997, con ocasión de la II sesión del Comité Trinacional de la Propiedad Intelectual.

En la cátedra de derechos de autor, patentes y marcas que fundó el doctor David Rangel Medina en el año de 1974, en algún momento señala el distinguido jurista mexicano que a la agrupación de reglas que versan sobre las formas de adquisición, conservación, ejercicio, respeto, defensa y terminación de los derechos que recaen sobre las obras del espíritu se le llama derecho de autor. Por ahora, yo me ocuparé de comentar brevemente –y de modo general– las que tratan específicamente de las formas de *respeto* y *defensa* de los derechos que recaen sobre las obras amparadas por el derecho de autor, que son las que con mayor frecuencia llaman la atención, lo mismo de los propios autores y titulares del derecho de autor, que de sus abogados y asesores en esta materia. Dicho en otras palabras, a continuación me voy a referir a los aspectos más importantes de la nueva legislación encaminados a *hacer efectivos* los derechos de los autores y de los titulares del derecho de autor.

A tan corta distancia de haber entrado en vigor la nueva legislación, resulta ocioso cualquier comentario sobre la manera como se aplican las nuevas disposiciones. El tiempo dará oportunidad de comentar estos aspectos prácticos, propios de la sociología jurídica.

Antes de referirme al tema de las normas que rigen las formas de respeto y defensa del derecho de autor, hay que recordar que en la antigua legislación –la de 1956 reformada en 1963–, el legislador mexicano consideraba la invasión del derecho de autor de una gravedad tal que estimó pertinente tratar las conductas que tomaban la forma de invasión del derecho de autor como un delito federal perseguible por el Ministerio Público Federal responsable del ejercicio de la acción penal correspondiente. Todo esto, desde luego, con independencia de la posibilidad de iniciar las acciones privadas correspondientes cuyo ejercicio sí le compete de modo directo a los particulares afectados.

La novedad más notable en el nuevo régimen de represión de la invasión del derecho de autor, radica precisamente en la adopción de nuevas figuras jurídicas encaminadas a ese fin.

II. SISTEMA ADMINISTRATIVO Y SISTEMA PENAL

A partir de marzo de 1997 hay dos sistemas de represión de los ilícitos en materia de derechos de autor:

1. El que se prevé en la nueva Ley federal del derecho de autor del 18 de diciembre de 1996, y
2. El que se prevé en el Decreto del 5 de diciembre de 1996 por el que se reforma el Código penal para el Distrito Federal en materia del fuero común y para toda la República en materia del fuero federal (el Código penal), también publicado en el *Diario Oficial de la Federación* del 24 de diciembre de 1996, con efectos a los noventa días después de esta fecha, como en el caso de la nueva ley autoral.

1. Sistema administrativo

1. Violaciones a la legislación autoral que corresponde sancionar al INDA (artículo 229, LFDA).
2. Violaciones a la legislación autoral que corresponde sancionar al IMPI (artículo 231, LFDA).

El sistema administrativo, llamado así porque corresponde a las autoridades administrativas vigilar su cumplimiento, está integrado por dos grupos de disposiciones. Un primer grupo, representado por disposiciones que tratan de las violaciones a la legislación autoral que corresponde sancionar al Instituto Mexicano del Derecho de Autor (INDA) y un segundo grupo en donde se trata el tema de las violaciones a la legislación autoral que corresponde sancionar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Tanto las violaciones del primer grupo como las del segundo, se encuentran previstas en la nueva Ley federal del derecho de autor.

Como sea, a las del primer grupo –las que corresponde sancionar al INDA–, el legislador de 1996 les llama simplemente «infracciones en materia de derecho de autor». Ello sugeriría que las del segundo grupo tratan de otra materia, esto es, de una materia distinta al derecho de autor, pues las violaciones del segundo grupo –las que corresponde sancionar al IMPI– son identificadas como «infracciones en materia de comercio». La realidad es que tanto las del primer grupo como las del segundo tratan de violaciones a la legislación autoral aun cuando sean identificadas con rubros que, a primera vista, sugieren lo contrario.

Las infracciones administrativas del primer grupo –las que corresponde sancionar al INDA– se encuentran en el artículo 229 de la nueva Ley federal del derecho de autor, en tanto que las infracciones administrativas del segundo grupo –las que corresponde sancionar al IMPI– se encuentran previstas en el artículo 231 de la nueva ley.

1.1. Diferentes procedimientos para la aplicación de sanciones administrativas

Una diferencia notable entre las infracciones que corresponde sancionar al INDA y las que pertenecen al grupo que sanciona el IMPI radica en que, en el caso de las que sanciona el INDA, el procedimiento para la aplicación de las sanciones por parte del INDA se realiza conforme a las disposiciones de la Ley federal del procedimiento administrativo (artículo 230, LFDA), en tanto que en el caso de las infracciones administrativas que sancionará el IMPI, el procedimiento se debe substanciar conforme a las disposiciones de la Ley de la propiedad industrial (artículo 234, LFDA).

La nueva Ley federal del derecho de autor prevé que las violaciones a la legislación autoral previstas en los artículos 229 y 231 serán sancionadas por el INDA y el IMPI. Lo que no dice el nuevo ordenamiento es si tales violaciones también serán perseguidas de oficio o sólo mediando una denuncia de parte ofendida, distinción que sí aparece en la nueva legislación penal, como se verá. Esto es, a diferencia

de la nueva legislación penal, la nueva ley autoral no contiene mención expresa sobre el tema de la persecución de las infracciones administrativas, ya sea de oficio o a petición de parte ofendida.

En materia penal la regla es la persecución de oficio y la excepción es la persecución tras querrela o denuncia. Una regla tan explícita no se conoce en materia administrativa. Por el contrario, en esta materia opera otra regla que entiende que a las autoridades administrativas les está permitido hacer sólo aquello que les está expresamente autorizado. Sea como fuere, el texto de los artículos 230 y 231 de la nueva ley autoral sugiere de modo muy intenso que las infracciones administrativas previstas en el nuevo ordenamiento autoral son perseguibles indistintamente de oficio o a querrela de parte. Esta noción se confirma por el hecho que la nueva Ley federal del derecho de autor en ningún momento señala que tal o cual infracción sólo es perseguible a petición de parte ofendida y sí en cambio le asigna la responsabilidad de sancionarla lo mismo al INDA que al IMPI sin distinguir en qué casos procede al INDA y al IMPI instrumentar tal responsabilidad. Por tanto, se estima que la regla que dice «donde la ley no distingue, no debemos distinguir», es de aplicación en estas circunstancias. Si para cumplir con la obligación de sancionar que la ley le impone al INDA y al IMPI es necesario que la violación a la ley sea previamente perseguida, ya sea de oficio o por una denuncia de un particular, habrá que entender que las autoridades administrativas están facultadas para perseguir y sancionar las violaciones a la ley, medie o no una denuncia.

1.2. Características que predominan en las infracciones administrativas de cada grupo

Sin que esto sea una regla, o algo que se acerque a ello, parecería que en el primer grupo de infracciones administrativas –las que sanciona el INDA– predominan las violaciones a la ley que no implican violaciones al aspecto patrimonial del derecho de autor, en tanto que en el segundo grupo de infracciones –las que sanciona el IMPI– parecen predominar las que implican una violación a los derechos patrimoniales

del autor o a otros derechos de los autores eventualmente resarcibles económicamente ²

2. Sistema penal

Por ahora sólo diré que el sistema penal de represión de los ilícitos en materia de derechos de autor –el de los delitos en esta materia previstos en el Código penal– se encuentra contenido en los artículos 424 al 429 del Código penal aplicable y en el segundo artículo transitorio del Decreto del 5 de diciembre de 1996. No es el lugar apropiado para hacer un análisis de las distintas normas penales contenidas en el Decreto del 5 de diciembre de 1996 ³. Baste decir que en el Decreto del 5 de diciembre de 1996 se contienen disposiciones penales en esta materia, ya sea porque al legislador mexicano le ha parecido pertinente conservar el carácter criminal para ciertas conductas violatorias del derecho de autor, o bien, porque la inclusión de alguna conducta en el catálogo de conductas criminales resulta necesaria para instrumentar compromisos contenidos en tratados internacionales de los que México forma parte en materia de propiedad intelectual. En este último supuesto se encuentra la norma mexicana incorporada en el Decreto del 5 de diciembre de 1996 que sirve para instrumentar la norma internacional contenida en el artículo 1717.1 del Tratado de libre comercio de América del Norte, al que me referiré por sus siglas en inglés NAFTA para diferenciarlo de otros tratados de libre comercio de los que México forma parte, esto es, de otros instrumentos de similar naturaleza que igual pueden ser identificados con las siglas TLC. Efectivamente, el artículo 1717.1 de este instrumento establece que:

«(...) cada una de las Partes dispondrá procedimientos y sanciones penales que se apliquen cuando menos en los casos de falsificación dolosa de marcas o de piratería de derechos de autor a escala comercial. Cada una de las Partes dispondrá que las sanciones aplicables incluyan pena de prisión o

² Se acompaña el texto del artículo 229, LFDA como Anexo 1 y el texto del artículo 231, LFDA, como Anexo 2

³ Se acompaña el texto íntegro del Decreto como Anexo 3.

multa, o ambas, que sean suficientes como medio de disuasión y compatibles con el nivel de las sanciones aplicadas a delitos de calidad equiparable».

La lectura del nuevo artículo 424, III del Código penal es una instrumentación en la legislación doméstica del compromiso contenido en el artículo 1717.1 del NAFTA en esta materia. Como se sabe, el artículo 133 de la Constitución mexicana deja claro que dicha instrumentación no es invariablemente necesaria, como lo exigen sistemas constitucionales distintos al mexicano. Ello no obstante, dicha instrumentación local ha parecido necesaria para dar cumplimiento a disposiciones como las contenidas en el artículo 1717.1 de NAFTA, en virtud de las palabras que escogieron los autores del texto del artículo 1717.1 para redactar el compromiso que ahí se contiene, mismo que no puede considerarse autoaplicativo o autoejecutivo.

En al ámbito de lo penal también hay que decir que, con excepción del delito previsto en el nuevo artículo 424, I del Código Penal, todos los demás delitos autorales que violen derechos de autor vigentes son perseguibles por querrela de parte ofendida; esto es, que para que el Ministerio Público Federal se ocupe de su investigación es necesario que medie la denuncia de un particular (artículo 429, Código penal).

3. Acciones civiles

Independientemente de los regímenes administrativo y penal para el respeto y la defensa del derecho de autor en México, todo titular del derecho de autor que vea violado un derecho reconocido por la legislación mexicana tiene el acceso al ejercicio de la acción civil tendiente a la reparación del daño y a la cesación de los actos constitutivos de invasión del derecho de autor. Todo esto, con independencia del hecho que las acciones específicas ejercitadas a estos fines en cada caso concreto se encuentren o no previstas en la legislación sobre la materia. Las cosas son así por aplicación del principio que entiende que *a la violación de todo derecho corresponde una acción*, esté o no previsto de modo expreso en la legislación especial el ejercicio

de la acción por conductas que vulneren, entorpezcan, limiten o violenten los derechos que la legislación reconoce en favor de los autores y de los titulares del derecho de autor.

III. CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

Complemento importante de las normas encaminadas al respeto y la defensa del derecho de autor lo constituyen las disposiciones sobre conciliación y arbitraje en esta materia, como aparecen en la nueva legislación autoral. Tanto la conciliación (que en la nueva ley también es llamada *avenencia*) como el arbitraje ya estaban previstos en la abrogada legislación autoral, de modo que no se trata de instituciones novedosas incorporadas en la legislación autoral por el legislador de 1996.

1. Conciliación (Artículos 217 y 218, LFDA)

La Ley federal del derecho de autor de 1996 conserva el procedimiento administrativo de *avenencia* encaminado a la solución de controversias a través de la *conciliación*. Situaciones que incumben más al ámbito de la sociología jurídica que a los temas jurídicos propiamente dichos, llevaron a situaciones que sugerían que este procedimiento de conciliación era una especie de requisito de procedibilidad para el ejercicio de acciones legales por la violación del derecho de autor. Si esto no estaba claro en la antigua legislación –que sí lo estaba–, la ley federal del derecho de autor de 1996 establece *expressis verbis* que este procedimiento es *opcional* y de ningún modo una condición para el ejercicio de acciones legales encaminadas al respeto y la defensa del derecho de autor (Artículo 217, LFDA).

La ley deja claro que durante el procedimiento administrativo de conciliación no se emitirá resolución alguna, sino que se trata de que las partes lleguen a un arreglo alcanzado precisamente entre sí y no por imposición o resolución de la autoridad. El INDA, sin embargo, puede tener alguna participación para que haya conciliación pero no

puede hacer pronunciamientos, planteamientos o *determinaciones* sobre el *fondo del asunto* (artículo 218, V, LFDA).

El convenio conciliatorio que eventualmente concluyan las partes tiene el carácter de cosa juzgada y título ejecutivo por disposición de ley (artículo 218, IV, LFDA).

Si las partes no llegan a un arreglo en el procedimiento de conciliación, el INDA debe invitar a las partes a que se sometan al arbitraje establecido en la ley, lo que las partes pueden o no aceptar (artículo 218, VI, LFDA).

Sobra decir que debe vigilarse todo lo que se diga en las audiencias del procedimiento de conciliación que son de una informalidad engañosa. Deberá obrarse con cautela al momento de hacer uso de la palabra en dichas diligencias, pues aunque lo que ahí ocurra es confidencial, todo indica que se debe levantar un acta de lo que ocurrió en el procedimiento de conciliación, misma que puede ser requerida al INDA por un juez competente en caso que haya pleito (artículo 218, último párrafo, LFDA).

2. Arbitraje (Artículos 219 a 228, LFDA)

Igual que su predecesora, la ley de 1996 prevé la posibilidad de que los conflictos en materia de derecho de autor sean resueltos a través del arbitraje.

La antigua legislación preveía un procedimiento de arbitraje en circunstancias en que la Dirección del Derecho de Autor debía actuar como árbitro (artículo 133, II de la Ley de 1956 reformada en 1963: «(...) la Dirección (...) exhortará a las partes para que la designen árbitro»). La ley de 1996 vuelve a prever el arbitraje como mecanismo de resolución de controversias, pero ahora ya no señala que la Dirección del Derecho de Autor será el árbitro. Ello no obstante, en vista de la intervención que sigue teniendo el INDA (artículos 221, 222, 227,

228, LFDA), el arbitraje previsto en la nueva Ley federal del derecho de autor sigue siendo un arbitraje «oficial», con características que lo hacen un arbitraje *sui generis* que deben aceptar las partes que se sometan al arbitraje previsto en la nueva ley como medio de solución de controversias.

Independientemente del carácter oficial que reviste el arbitraje previsto en la nueva legislación, la Ley federal del derecho de autor incluye una estipulación expresa en el sentido que ningún servidor público, ya sea del INDA o de otra oficina pública, puede actuar como árbitro (artículo 223, VIII, LFDA).

2.1. Peculiaridades del arbitraje previsto en la nueva legislación autoral

Si las partes se someten al arbitraje previsto en la Ley federal del derecho de autor, deben estar conscientes que este arbitraje tiene ciertas peculiaridades que no tiene la institución del arbitraje en ámbitos distintos al de la nueva Ley Federal del Derecho de Autor de 1996. Brevemente reseño cuatro de esas peculiaridades:

1. Sólo pueden ser árbitros las personas que aparezcan en la lista que se publicará en el mes de enero de cada año por el INDA. Si alguna de las partes propone como árbitro a una persona que no esté en la lista de «personas autorizadas para fungir como árbitros» prevista en el artículo 221, LFDA, todo indica que esa persona no podrá actuar como árbitro en el procedimiento arbitral previsto en la Ley federal del derecho de autor de 1996.
2. En materia de propiedad intelectual es cosa averiguada que el arbitraje con un solo árbitro hace más evidentes las ventajas de esta forma de solución de controversias que cuando se adopta el esquema de un grupo arbitral normalmente integrado por tres personas. Contra tendencias actuales en materia de arbitraje, la forma como están redactadas las disposiciones sobre arbitraje en la nueva ley sugiere que en el procedimiento arbitral ahí previsto,

no puede llevarse a cabo con un solo árbitro. La ley se refiere siempre a un árbitro por cada una de las partes, a un tercer árbitro que actúa como presidente y a un grupo arbitral. Interpretadas con liberalidad y flexibilidad, las mismas disposiciones pueden llevar a la conclusión de que un solo árbitro puede tener las funciones que la nueva ley parece asignarles a tres personas distintas, o por lo menos a dos (artículo 222, LFDA). Pero, como tengo dicho, la ley siempre se refiere a un «grupo arbitral».

3. Todo indica que el abogado que acepte formar parte de la lista de árbitros y posteriormente asuma la responsabilidad de actuar como tal en un caso, también asume el compromiso de que su trabajo sea compensado conforme al arancel que debe expedir anualmente el INDA en materia de pago de honorarios para árbitros. Se estima que lo saludable hubiera sido que dicho arancel se aplicara única y exclusivamente para los casos en que no hubiere un entendimiento previo sobre los criterios que regirían el pago de honorarios a los árbitros.
4. El arbitraje previsto en la Ley federal del derecho de autor debe substanciarse en un plazo máximo de sesenta días. La fecha a partir de la cual debe computarse el plazo de sesenta días es un tema debatible (artículo 224, LFDA).

3. El procedimiento arbitral de la Ley Federal del Derecho de Autor de 1996 y otros procedimientos arbitrales

Aunque la ley no es explícita en este punto, es claro que las partes que deseen dirimir sus controversias sobre temas autorales a través del arbitraje están en completa libertad de hacerlo a través de un procedimiento arbitral distinto al que se prevé en la ley de 1996. Cuando ésa sea la voluntad de las partes, así deberán expresarlo.

Las características del procedimiento arbitral previsto en la Ley de 1996 no serán aplicables a los casos en que las partes hayan acordado

la aplicación de un procedimiento arbitral distinto. Cuando las partes acuerden la adopción de un procedimiento arbitral distinto al de la Ley de 1996, el procedimiento se registrará por las reglas convenidas por las partes y no necesariamente por las que se contienen en la nueva Ley federal del derecho de autor.

IV. PALABRAS FINALES

Entiendo que con lo anterior se cumple con el ofrecimiento de presentar un panorama general del sistema legal mexicano encaminado a reprimir los actos de invasión del derecho de autor, vigente en México a partir del 24 de marzo de 1996.

Todo ello, en el mes y el año en que los abogados practicantes de la disciplina de los derechos intelectuales nos encontramos de fiesta en cinco continentes, con motivo del centenario de la creación de la AIPPI, el organismo internacional privado más importante en materia de derechos intelectuales fundado en la ciudad de Bruselas en el año de 1897, es decir, hace exactamente cien años, ni más ni menos que bajo la presidencia del distinguido abogado y tratadista francés Eugene Pouillet, precisamente en la tierra del padre de la teoría de los derechos intelectuales, el belga Edmund Picard, el primer jurista que se resolvió decididamente a crear una categoría de derechos distinta a los derechos reales y personales, los derechos intelectuales, en conferencia que pronunciara en el Colegio de Abogados de Bruselas años atrás.

Hace ya catorce años, los practicantes de la disciplina de los derechos intelectuales de cinco continentes celebramos en la ciudad de París los primeros cien años de otra centenaria institución como es la Unión de París contenida en la Convención de París para la protección de la propiedad Industrial firmada en la ciudad de París en 1883.

En momentos llamados de «globalización» en que se revisan muchos de los criterios y reglas que han regido las formas de adquisición,

conservación, ejercicio, respeto, defensa y terminación de los derechos que recaen sobre los bienes inmateriales de la empresa, parece muy pertinente recordar las características básicas, fundamentales que han marcado el perfil de instituciones centenarias como la Unión de París y la AIPPI.

Ante todo, el reconocimiento de que la *uniformidad* de reglas, prácticas y criterios en materia de respeto y defensa de los derechos que recaen sobre los bienes inmateriales de la empresa es una *noción abstracta*, irrealizable e inalcanzable, si se tiene presente que el derecho de la propiedad intelectual es una institución jurídica dependiente de otras instituciones y ramas del derecho que no es posible uniformar a nivel global, ni en la imaginación ni mucho menos en la realidad.

Uniformar el derecho de la propiedad intelectual implicaría la uniformidad del derecho civil, el derecho mercantil, el derecho penal, el derecho administrativo, el derecho procesal de todos los países, objetivo, desde luego, inalcanzable –e indeseable– como tengo dicho.

Nociones tan fundamentales pasaron desapercibidas para los hombres de empresa que buscaban esa uniformidad hace más de cien años, antes de la iniciación de los *trabajos preparatorios* encaminados a la firma de la Unión de París. Fue necesaria la intervención del hombre de la ley para que la década de los *trabajos preparatorios* tuviera inicio, en el entendido que tal cosa como la uniformidad del derecho de la propiedad industrial debía para siempre borrarse de la mente de los hombres de empresa, si lo que se pretendía era la redacción y adopción de un instrumento útil y práctico, con existencia en la realidad y no sólo en el papel. Los convencionistas de 1883 lo consiguieron a través de la adopción de reglas y criterios sólidos pero flexibles, que después de haber sido objeto de revisión en cinco ocasiones, continúan vigentes a más de un siglo de distancia de su adopción.

Ello se ha conseguido gracias al perfil de las normas unionistas que han buscado la *armonización* donde ha sido posible, por encima de la *uniformidad*. *Armonizar* significa localizar los *puntos en común*

de la legislación y práctica de distintos países para ponerlos al servicio de los propietarios de los bienes inmateriales de la empresa a través de instrumentos internacionales como los que aquí se han comentado, todo lo cual vale la pena recordar en el mes y el año en que se conmemora el centenario de otra institución marcada desde sus inicios por un espíritu similar y que preside el distinguido jurista brasileño Peter Siemsen que hoy nos honra con su presencia ⁴.

Estimo que estas ideas deben tenerse presentes cuando se discuten temas concernientes al respeto y a la defensa de los derechos intelectuales en una reunión en la que están representadas distintas naciones de este continente. Reuniones como ésta deben aplaudirse, pues contribuyen a ese entendimiento mutuo de las instituciones de cada nación y a la *armonización* que hoy permite hablar de instituciones centenarias.

⁴ Efectivamente, entre el 16 y el 27 de abril de 1997 tuvieron lugar los actos conmemorativos del centenario de la fundación de la AIPPI (*Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle*) en Bruselas, Viena y Budapest.

Anexo 1

TÍTULO XII

De los procedimientos administrativos

Capítulo I

De las infracciones en materia de derechos de autor

Artículo 229.- Son infracciones en materia de derecho de autor:

I. Celebrar el editor, empresario, productor, empleador, organismo de radio-difusión o licenciatario un contrato que tenga por objeto la transmisión de derechos de autor en contravención a lo dispuesto por la presente Ley (sic);

II. Infringir el licenciatario los términos de la licencia obligatoria que se hubiese declarado conforme al artículo 146 la presente Ley;

III. Ostentarse como sociedad de gestión colectiva sin haber obtenido el registro correspondiente ante el Instituto;

IV. No proporcionar, sin causa justificada, al Instituto, siendo administrador de una sociedad de gestión colectiva, los informes y documentos a que se refieren los artículos 204 fracción IV y 207 de la presente Ley;

V. No insertar en una obra publicada las menciones a que se refiere el artículo 17 de la presente Ley;

VI. Omitir o insertar con falsedad en una edición los datos a que se refiere el artículo 53 de la presente Ley;

VII. Omitir o insertar con falsedad las menciones a que se refiere el artículo 54 de la presente Ley;

VIII. No insertar en un fonograma las menciones a que se refiere el artículo 132 de la presente Ley;

IX. Publicar una obra, estando autorizado para ello, sin mencionar en los ejemplares de ella el nombre del autor, traductor, compilador, o arreglista;

X. Publicar una obra, estando autorizado para ello, con menoscabo de la reputación del autor como tal y, en su caso, del traductor, compilador, arreglista o adaptador;

XI. Publicar antes que la Federación, los Estados o los Municipios y sin autorización las obras hechas en el servicio oficial;

XII. Emplear dolosamente en una obra un título que induzca a confusión con otra publicada con anterioridad;

XIII. Fijar, representar, publicar, efectuar alguna comunicación o utilizar en cualquier forma una obra literaria y artística, protegida conforme al capítulo III, del Título VII, de la presente Ley, sin mencionar la comunidad o etnia, o en su caso la región de la República Mexicana de la que es propia; y

XIV. Las demás que se deriven de la interpretación de la presente Ley y sus reglamentos.

Anexo 2

Capítulo II

De las infracciones en materia de comercio

Artículo 231.- Constituyen infracciones en materia de comercio las siguientes conductas cuando sean realizadas con fines de lucro directo o indirecto:

I. Comunicar o utilizar públicamente una obra protegida por cualquier medio, y de cualquier forma sin la autorización previa y expresa del autor, de sus legítimos herederos o del titular del derecho patrimonial de autor;

II. Utilizar la imagen de una persona sin su autorización o la de sus causahabientes;

III. Producir, fabricar, almacenar, distribuir, transportar o comercializar copias ilícitas de obras protegidas por esta Ley;

IV. Ofrecer en venta, almacenar, transportar o poner en circulación obras protegidas por esta Ley que hayan sido deformadas, modificadas o mutiladas sin autorización del titular del derecho de autor;

V. Importar, vender, arrendar o realizar cualquier acto que permita tener un dispositivo o sistema cuya finalidad sea desactivar los dispositivos electrónicos de protección de un programa de computación;

VI. Retransmitir, fijar, reproducir y difundir al público emisiones de organismos de radiodifusión y sin la autorización debida;

VII. Usar, reproducir o explotar una reserva de derechos protegida o un programa de cómputo sin el consentimiento del titular;

VIII. Usar o explotar un nombre, título, denominación, características físicas o psicológicas, o características de operación de tal forma que induzcan a error o confusión con una reserva de derechos protegida;

IX. Utilizar las obras literarias y artísticas protegidas por el capítulo III, del Título VII de la presente Ley en contravención a lo dispuesto por el artículo 158 de la misma; y

X. Las demás infracciones a las disposiciones de la Ley que impliquen conducta a escala comercial o industrial relacionada con obras protegidas por esta Ley.

Anexo 3

TÍTULO VIGÉSIMO SEXTO DE LOS DELITOS EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR

Artículo 424.- Se impondrá prisión de seis meses a seis años y de trescientos a tres mil días multa:

I. Al que especule en cualquier forma con los libros de texto gratuitos que distribuye la Secretaría de Educación Pública;

II. Al editor, productor o grabador que a sabiendas produzca más números de ejemplares de una obra protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor, que los autorizados por el titular de los derechos;

III. A quien produzca, fabrique, importe, venda, almacene, transporte, distribuya o arriende obras protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor en forma dolosa, a escala comercial y sin autorización del titular de los derechos, y

IV. A quien fabrique con fines de lucro un dispositivo o sistema cuya finalidad sea desactivar los dispositivos electrónicos de protección de un programa de computación.

Artículo 425.- Se impondrá prisión de seis meses a dos años o de trescientos a tres mil días multa, al que a sabiendas y sin derecho explote con fines de lucro una interpretación o una ejecución.

Artículo 426.- Se impondrá prisión de seis meses a cuatro años y de trescientos a tres mil días multa, en los casos siguientes:

I. A quien fabrique, importe, venda o arriende un dispositivo o sistema para descifrar una señal de satélite cifrada, portadora de programas, sin autorización del distribuidor legítimo de dicha señal, y

II. A quien realice con fines de lucro cualquier acto con la finalidad de descifrar una señal de satélite cifrada, portadora de programas, sin la autorización del distribuidor legítimo de dicha señal.

Artículo 427.- Se impondrá prisión de seis meses a seis años y de trescientos a tres mil días multa, a quien publique a sabiendas una obra sustituyendo el nombre del autor por otro nombre.

EL RESPETO Y LA DEFENSA DEL DERECHO
DE AUTOR EN LA NUEVA LEGISLACIÓN MEXICANA

Artículo 428.- Las sanciones pecuniarias previstas en el presente título se aplicarán sin perjuicio de la reparación del daño, cuyo monto no podrá ser menor al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o de la prestación de servicios que impliquen violación a alguno o algunos de los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de autor.

Artículo 429.- Los delitos previstos en este título se perseguirán por querrela de parte ofendida, salvo el caso previsto en el artículo 424, fracción I, que será perseguido de oficio. En el caso de que los derechos de autor hayan entrado al dominio público, la querrela la formulará la Secretaría de Educación Pública, considerándose como parte ofendida.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El artículo Segundo del presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Los artículos Primero y Tercero entrarán en vigor noventa días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- A las personas que hubieren cometido delitos contemplados en la Ley Federal de derechos de Autor publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1956, con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, les serán aplicables las sanciones vigentes al momento en que se hubieren realizado dichas conductas. Al efecto, los artículos 135 a 144 de dicha ley, seguirán vigentes y se aplicarán a la persecución, sanción y ejecución de sentencias por hechos ejecutados hasta antes de la entrada en vigor del Título Vigésimo Sexto que se adiciona al Código Penal para el Distrito Federal en materia de Fuero Común y para toda la República en materia de Fuero Federal por este Decreto.

México, D.F., a 5 de diciembre de 1996.- Dip. Sara Esther Muza Simón, Presidente.- Sen. Laura Pavón Jaramillo, Presidenta.- Dip. José Luis Martínez Álvarez, Secretario.- Sen. Ángel Ventura Valle, Secretario. Rúbricas.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dieciocho días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y seis. Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor.- Rúbrica.